



MEMORIA JUSTIFICATIVA SOBRE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACIÓN MEDIANTE TRAMITACIÓN DE EMERGENCIA DEL SUMINISTRO DE MAMPARAS Y BIOMBOS DE SEPARACIÓN Y SU DISTRIBUCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS COMO MEDIDA DE DISTANCIAMIENTO CONTRA EL COVID-19

La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a pandemia internacional.

Ante la magnitud que comenzaba a alcanzar la pandemia, en España se adoptaron medidas inmediatas que redujeran la propagación de la enfermedad entre los que se encuentra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaraba el estado de alarma en todo el país y que permitió hacer frente a la situación de emergencia sanitaria y proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos.

Tras el proceso de desescalada y el fin de la vigencia del estado de alarma España entró en una etapa de nueva normalidad, durante la cual se continuaron adoptando medidas dirigidas a controlar los brotes y frenar los contagios. Entre ellas, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Estas medidas, tanto a nivel nacional como territorial, tenían como denominador común, la prevención situaciones de riesgo, la intensificación de las capacidades de seguimiento y vigilancia de la epidemia y el refuerzo de los servicios asistenciales y de salud pública.

No obstante, en el momento actual en España, al igual que en la mayoría de países europeos, se registra una tendencia ascendente en el número de casos. Este incremento se ha traducido en un aumento importante de la Incidencia Acumulada en catorce días, hasta situarse, por encima del umbral de alto riesgo que marcan los criterios del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Teniendo en cuenta que este nuevo virus tiene una gran capacidad de expansión entre la población, con un índice de propagación R_0 de entre 1,4 y 3,5, según los casos, y para el que actualmente no se dispone de vacuna ni tratamiento médico específico, la prevención junto con las medidas de higiene y distanciamiento social, se están convirtiendo en una de las más eficaces medidas de lucha contra la enfermedad.

Como principal vía de contagio, se ha detectado la vía aérea, con una alta capacidad de permanecer en superficies y objetos que, al contacto con ellas, se convierte también vía de contagio. Además, la capacidad de contagio del virus se da con carácter previo a la aparición de síntomas en el transmisor y, aunque afecta a todos los segmentos de población, es especialmente letal en personas con patologías previas o de avanzada edad, siendo los niños portadores, en muchas ocasiones asintomáticos.

En el ámbito educativo, ante la detección de los primeros casos en España, la Comunidad de Madrid comienza adoptando mediante la Orden 338/2020, de 9 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas y recomendaciones de salud pública en la Comunidad de Madrid como consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

En el artículo primero de esta Orden 338/2020, de 9 de marzo, se acuerda “*La suspensión temporal de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas,*





ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, incluidos en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación”, recomendado continuar las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y on-line.

Una vez superados los momentos más críticos de la expansión de la enfermedad, y ante la necesidad de retomar una nueva normalidad, en el ámbito educativo, el artículo 9 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, establece que *"Las administraciones educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan.*

En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio"

No obstante, actualmente se ha recrudecido la transmisión del virus situándose en un nivel de riesgo alto o muy alto de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales que justifican una intensificación de las medidas que se venían aplicando.

Ya en la Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre medidas organizativas y de prevención, higiene y promoción de la salud frente a COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-2021 de 9 de julio, se señalaba *que Las medidas de prevención e higiene, según establecen las autoridades sanitarias, se deben centrar en la limitación de contactos manteniendo una distancia interpersonal de 1,5 metros, la higiene de manos y respiratoria, la ventilación frecuente de los espacios y la limpieza del centro, así como una gestión adecuada y ágil ante la aparición de un caso*, siendo fundamental la aplicación de las distancias de seguridad entre alumnos que reduzcan las ratios de ocupación de las aulas para evitar la transmisión por vía aérea del virus.

No obstante, la disponibilidad de espacios en los centros viene determinada por las edificaciones disponibles en los centros y aunque mediante otras actuaciones hace está logrando ampliar espacios para la expansión de las aulas, no es suficiente, por lo que es necesario acudir a otros instrumentos de separación que eviten la transmisión vía aérea del virus al no poder lograrse la separación del 1,5 m en todos los casos.

Entre las medidas alternativas, se encuentran las mamparas y biombos de separación que aislen de forma individual a aquellos alumnos que no puedan guardar la separación de seguridad y cuyos resultados ya quedaron acreditadas mediante la adquisición mediante contratación de emergencia acordada mediante Orden 2174/2020, de 14 de septiembre del Consejero de Educación y Juventud.

Estas mamparas y biombos atienden tanto la necesidad de separación en las aulas como en otros espacios compartidos como los comedores y proporcionan, según el caso, la visibilidad adecuada para la docencia. Se trata pues, de una necesidad que ha de extenderse más allá de la primera adquisición y que en el escenario actual se convierte en especialmente urgente con las clases iniciadas y el repunte de rebrotes que amenaza con un colapso sanitario si no se reduce el índice de contagios.





Dentro del marco normativo español, la contratación pública para casos de excepcionalidad está perfectamente reglada en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP). Así, el citado artículo 120 establece que:

"1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente. En caso de que no exista crédito adecuado y suficiente, una vez adoptado el acuerdo, se procederá a su dotación de conformidad con lo establecido en la Ley General Presupuestaria.

(. . .)

c) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá la tramitación de un procedimiento ordinario.(...)"

En el caso planteado del COVID-19, con efectos que lejos de remitir parecen rebrotar en múltiples puntos, se requieren actuaciones contundentes que eviten una situación como la vivida en los meses precedentes que dieron lugar a la declaración del estado de alarma y que se hacen especialmente urgentes por el grave peligro de contagio que implica el inicio del curso escolar sin las medidas de prevención adecuadas. La situación resulta especialmente grave y peligrosa, no solo por la naturaleza de la población afectada, sino también por su distribución territorial, lo que justifica la contratación de los medios necesarios bajo un régimen excepcional. La asociación de los efectos del COVID-19 y la necesidad de hacer uso de medidas para la gestión eficiente de las Administraciones Públicas para combatirlo ya quedó puesta de manifiesto en el artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 que establecía que *"La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014"* lo que conducía a la asociación de grave peligro y existencia del COVID-19 en la sociedad de forma inequívoca al establecer *"todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por*





el Consejo de Ministros para hacer frente al COVID-19, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”

Así, la contratación con empresa especializada el suministro de pantallas y biombos de protección (para comedor y aula), como medida alternativa para aquellos casos en los que no sea posible conseguir la separación de 1,5 m se encontraría justificada por su carácter de urgencia y su necesidad para evitar un riesgo grave para la salud según lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y en consecuencia susceptibles de su contratación sujeto a al carácter de tramitación de emergencia.

Se estima que es necesario servir mamparas de separación para mesas de comedor, mamparas para pupitres y biombos para gimnasios y otros espacios, que se entregarían directamente en los centros y con carácter inmediato, estimándose su coste en 500.000 euros.

En consecuencia, la contratación del suministro de mamparas en centros educativos como medida de distanciamiento contra el COVID- 19 es una necesidad sobrevenida y totalmente justificada que deriva las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a la pandemia y ha de ser atendida con toda celeridad y urgencia, no siendo factible otra forma de contratación distinta a la tramitación de emergencia de contratación, conforme a lo dispuesto en el artículo 120 de la LCSP y artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo.

Madrid, 26 de octubre de 2020

EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCUTRAS Y SERVICIOS

Fdo.: Ignacio García Rodríguez

